



# Asamblea General

Distr. general  
23 de abril de 2015

Original: español

---

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 67.º período de sesiones (26 a 30 de agosto de 2013)

#### N.º 31/2013 (Paraguay)

#### Comunicación dirigida al Gobierno el 26 de noviembre de 2012

Relativa a Lucía Agüero Romero, Felipe Nery Urbina Gamarra, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana, Alcides Ramírez Paniagua, Juan Carlos Tillería, Richard Ariel Barrios Cardozo (menor de 15 años de edad), Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Néstor Castro, María Fanny Olmedo, Dolores López Peralta y Arnaldo Quintana

El Gobierno respondió a la comunicación del Grupo de Trabajo el 25 de enero de 2013.

#### El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió la mencionada comunicación al Gobierno.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de

GE.15-08147



\* 1 5 0 8 1 4 7 \*

Se ruega reciclar



Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

3. La comunicación se refiere a las siguientes personas, todas de nacionalidad paraguaya:

a) Lucía Agüero Romero, de 27 años de edad, viuda, madre de dos hijos menores de edad, campesina y estudiante, domiciliada en Asunción (departamento Central);

b) Felipe Nery Urbina Gamarra, de 50 años de edad, domiciliado en la colonia Yvy Pyta, distrito de Curuguaty (departamento de Canindeyú);

c) Luis Olmedo Paredes, de 21 años de edad, domiciliado en Ybycu'í (departamento de Paraguari);

d) Arnaldo Quintana, de 18 años de edad, domiciliado en el distrito de Curuguaty;

e) Alcides Ramírez Paniagua, de 18 años de edad, domiciliado en el distrito de Curuguaty;

f) Juan Carlos Tillería, de 39 años de edad, campesino, domiciliado en el distrito de Ybycu'í;

g) Richard Ariel Barrios Cardozo, menor de 15 años de edad.

h) Felipe Benítez Balmori, de 57 años de edad, campesino, domiciliado en la colonia Yvy Pyta;

i) Adalberto Castro, de 24 años de edad, domiciliado en la colonia Yvy Pyta;

j) Néstor Castro, mayor de edad, domiciliado en la colonia Yvy Pyta, recluso en la Penitenciaría La Esperanza en la ciudad de Asunción;

k) María Fanny Olmedo, de 19 años de edad, domiciliada en el distrito de Curuguaty;

l) Dolores López Peralta, de 22 años de edad, oriunda del distrito de Curuguaty;

m) Arnaldo Quintana, de 18 años de edad, domiciliado en el distrito de Curuguaty.

4. Según la fuente, las personas arriba mencionadas fueron detenidas en relación con una operación policial de allanamiento y desalojo en Marina Cué, distrito de Curuguaty, el 15 de junio de 2012.
5. Según la fuente, la propiedad de la finca de Marina Cué se encuentra en litigio judicial. Mientras una acción de nulidad se encontraba en consideración ante la Corte Suprema de Justicia de la República contra la empresa Campos Morumbí SA Comercial y Agropecuaria, un juez, a pedido del fiscal, decretó, irregular e ilegalmente, un operativo de allanamiento y desalojo contra los ocupantes de la finca, quienes sostienen que la referida empresa no tiene títulos de propiedad sobre la hacienda.
6. En el operativo, que tuvo lugar en horas de la madrugada del 15 de junio de 2012, habrían participado más de 400 efectivos policiales, 20 patrulleros y miembros de la policía montada y de la policía antidisturbios, con apoyo de helicópteros. Como resultado del enfrentamiento, 11 campesinos y 6 policías resultaron muertos y 80 personas heridas; entre ellas la Sra. Agüero Romero, que resultó herida de bala en una pierna.
7. Las personas arriba mencionadas y otros 41 campesinos habrían sido acusados de los delitos siguientes: homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión.
8. Según la fuente, estas personas fueron golpeadas y sujetas a malos tratos luego de su detención. Algunas incluso fueron torturadas.
9. Durante estos sucesos, el menor Richard Ariel Barrios Cardozo también habría sido detenido y seriamente golpeado. Se encuentra internado en el Centro de Menores de Villarrica. Habría presentado un recurso de hábeas corpus que no habría sido tramitado.
10. El 25 de septiembre de 2012, los Sres. Urbina Gamarra, Olmedo Paredes, Quintana, Ramírez Paniagua y Tillería, y la Sra. Agüero Romero iniciaron una huelga de hambre en protesta por la lentitud del proceso de investigación y por las irregularidades de la acción judicial. Se limitaron durante 59 días a beber agua. La Sra. Agüero Romero habría perdido 14 kilogramos de peso y sufriría de baja tensión arterial.
11. Ante el deterioro de su estado de salud, estas personas habrían sido trasladadas desde la Penitenciaría de Coronel Oviedo hasta el Hospital Nacional de Itagua.
12. Afirma la fuente que la resolución judicial A.J.N. N.º 292 que dispuso la medida cautelar de prisión preventiva, emitida por el juez penal de garantías de Curuguaty el 16 de junio de 2012, no contiene fundamento jurídico ni fáctico alguno, a pesar de que la legislación paraguaya obliga a los jueces a fundamentar sus resoluciones y a ajustarlas al derecho nacional e internacional para el respeto de las garantías del debido proceso. El juez encargado de controlar el procedimiento no ha realizado gestión alguna en orden a subsanar esta grave omisión.
13. La Fiscalía General de la República no habría presentado prueba alguna que incrimine a estas personas. El juez no ha tenido en cuenta ninguno de los elementos de descargo que permitirían desvincular a varios de los procesados con el caso y así otorgarles la libertad. Se afirma que alguno de los acusados ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos el día indicado, y que fueron detenidos simplemente porque su nombre figuraba en un antiguo censo de pobladores del lugar.
14. El proceso habría mostrado serias omisiones y graves contradicciones. Se afirma que el fiscal del caso mantendría vínculos sociales con la familia Riquelme, interesada en las tierras de la mencionada finca. El proceso judicial penal contra estas personas no progresa y habría múltiples cuestionamientos por la falta de independencia y eficiencia en la investigación.

15. Según la fuente, los hechos de Marina Cué se inscriben en un agudo conflicto por tierras agrícolas del Suroriente paraguayo, que enfrenta a sectores agropecuarios brasileños dedicados al cultivo de soja y vinculados con autoridades locales, a miembros de las comunidades indígenas del pueblo axe, que ven su hábitat forestal y sus tierras deforestadas y ocupadas por las empresas agroexportadoras.

16. Indígenas del pueblo axe habrían venido denunciando sin éxito estos hechos y los despojos a los cuales se estarían viendo sometidos. Las denuncias refieren que niños del pueblo axe estarían sufriendo en su salud las consecuencias del uso de pesticidas y agentes químicos contaminantes utilizados por las empresas agroexportadoras.

17. La fuente informa también que en horas de la madrugada del 24 de noviembre de 2012, tuvo lugar un violento desalojo por parte de la Policía Anti-Motines, de grupos de manifestantes que acampaban frente a los locales de la Fiscalía General de la República en Asunción, en protesta por la detención de los campesinos imputados y por la no investigación de quienes se reclaman propietarios e inquilinos de las tierras en cuestión. Un agente policial habría rociado con gas el rostro de una de las manifestantes. El desalojo tuvo lugar sin la presencia de un miembro de la Fiscalía General de la República, en violación de la legislación paraguaya. Catorce manifestantes sufrieron heridas con balines de goma; otros sufrieron golpes y contusiones, incluyendo fracturas.

18. El Grupo de Trabajo fue también informado de que el 10 de octubre de 2012, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias enviaron al Gobierno del Paraguay una carta de alegaciones sobre los hechos acontecidos el 15 de junio en Curuguaty, que todavía no ha recibido respuesta.

19. La fuente considera que la detención de estas personas, alguna de las cuales no estaba presentes en el lugar de los hechos, está motivada en su origen campesino y se enmarca en la lucha del pueblo indígena axe por sus derechos. La acción de allanamiento y desalojo de la finca de Marina Cué se ordenó irregularmente mientras se encontraba pendiente una acción de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de la República. La resolución judicial de 16 de junio de 2012 que dispuso la medida cautelar de prisión preventiva no contiene fundamentos jurídicos ni fácticos, en violación de la legislación paraguaya que obliga a los jueces a fundamentar sus resoluciones y a ajustarlas a derecho.

20. Reitera la fuente que el juez de la causa no ha tenido en cuenta ninguno de los elementos de descargo en favor de los imputados y que la Fiscalía General de la República no ha presentado prueba alguna que les incrimine. El proceso, que habría presentado serias omisiones y graves contradicciones, se encuentra prácticamente paralizado y habría múltiples cuestionamientos por la falta de independencia y eficiencia en la investigación. Mientras tanto estas personas continúan arbitrariamente detenidas en espera de juicio.

21. Según la fuente la detención de estas personas es arbitraria.

#### *Respuesta del Gobierno*

22. En su respuesta, que el Grupo de Trabajo agradece, el Gobierno comienza asegurando que no ha existido lentitud ni retardo en las investigaciones, toda vez que se dio cumplimiento al término otorgado por el Juzgado de Garantía, que fijó un plazo para las investigaciones, que concluyó el 16 de diciembre de 2012. Agrega que no ha habido denegación de pruebas, sino que las rendidas por las defensas “no han logrado variar o revocar las privaciones de libertad a la que se encuentran sometidos los inculpados Barrios, Benítez, Castro, Castro, Olmedo, Peralta y Quintana”. Sostiene que todas las personas a las que se refiere la comunicación “fueron aprehendidas dentro de inmueble donde ocurrió el hecho, lo que desvirtúa plenamente la alegación de falta de pruebas”. Apoya estas alegaciones en que aquellos que fueron detenidos por orden de la Fiscal originaria fuera del

lugar de los hechos y concretamente frente al Hospital de Curuguaty, fueron liberados de los cargos que en un principio se les formuló. Del mismo modo, sostiene el Gobierno que los cargos que fueron formulados contra un fiscal acusador no fueron probados por quienes los alegaban.

23. Sostiene también el Gobierno que la acusación formal se limitó a 14 detenidos, excluyéndose del caso a otros tres contra los que no hubo pruebas de participación en los hechos alegados. Sostiene que la audiencia preliminar para los procesados debía tener lugar el 14 de febrero de 2013.

24. El Gobierno en su respuesta añade que dispuso reparaciones económicas para cada familia de los campesinos fallecidos en los incidentes relatados por la fuente. Y agrega que los detenidos Lucía Agüero, Felipe Nery Urbina, Luis Olmedo, Arnaldo Quintana, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería se encuentran detenidos en sus domicilios, luego de la huelga de hambre que realizaron.

25. Manifiesta también el Gobierno que las autoridades realizaron un seguimiento estricto a las condiciones carcelarias durante el período de la huelga de hambre, y que aquéllos que según informes médicos se encontraban en peligro de muerte, fueron trasladados a recintos hospitalarios, donde se negaron a recibir asistencia. Con posterioridad, aquéllos más renuentes a dejar la huelga fueron trasladados a un hospital público y luego quedaron privados de libertad en sus casas.

26. Según el Gobierno, no puede alegarse ausencia de órdenes de detención. El 13 de junio de 2012 la Agente Fiscal de Curuguaty solicitó orden de allanamiento del predio en que ocurrieron los hechos, la que fue concedida por el juez competente para la verificación de personas extrañas en el predio con el objeto de identificar a los extraños e incautar las armas que pudieren haber tenido. La orden al jefe de los servicios policiales intervinientes —según expresa el Gobierno—, era la de “agotar la instancia conciliadora con los ocupantes del inmueble”. No obstante estas instrucciones, los agentes policiales se vieron atacados “con disparos con armas de fuego, cayendo en primer lugar herido de muerte el jefe del operativo y a partir del mismo se produjeron disparos cruzados de armas de fuego”, con un saldo de 17 fallecidos (11 civiles y 6 policías), más 19 heridos.

27. En el proceso se investiga la comisión de los delitos de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesiones graves, asociación criminal, coacción, coacción grave e invasión de inmueble. Los inculcados son 45.

#### *Comentarios de la fuente*

28. Los comentarios de la fuente a la respuesta del Gobierno no desmienten el hecho, de gran importancia, de que dos días antes de los hechos, el juez competente accedió a una petición del Fiscal competente de allanamiento del predio para la verificación de la presencia de personas extrañas, por lo que no se puede sostenerse que el operativo policial careció de orden judicial. La fuente tampoco desmiente que los funcionarios policiales fueron atacados por las personas que habían ingresado al predio. Tampoco se desmiente que el primer funcionario muerto por armas de fuego fue el jefe policial del operativo.

29. Agrega la duplica que “no todas las personas que fueron privadas de su libertad fueron aprehendidas en el lugar de los hechos” y que “estas personas fueron aprehendidas sin orden de autoridad competente, por lo que sus arrestos fueron arbitrarios”. Tales afirmaciones nada aportan a la apreciación del Grupo de Trabajo del carácter arbitrario o no de la privación de libertad, pues no se indica quiénes habrían sido detenidos en el lugar de los hechos y quiénes no.

30. Más adelante la fuente se refiere a Miguel Ángel Correa Franco y Marcelo Trinidad Paredes y a su privación de libertad y liberación. El dato también es irrelevante para el

Grupo, pues ninguna de estas dos personas está incluida en el requerimiento que da origen a este caso.

### **Deliberaciones**

31. La fuente afirma que el proceso “habría presentado serias omisiones y graves contradicciones; se encuentra prácticamente paralizado y habría múltiples cuestionamientos por la falta de independencia y eficiencia en la investigación. Mientras tanto estas personas continúan arbitrariamente detenidas en espera de juicio”. Sin poder el Grupo de Trabajo conocer las “serias omisiones y graves contradicciones”, ni saber de “los múltiples cuestionamientos por la falta de independencia y eficiencia de la investigación”, no resulta posible emitir una Opinión sobre el carácter arbitrario o no de las detenciones.

32. Estas imprecisiones también aparecen en la comunicación original de la fuente, en la que se afirman hechos tales como que el fiscal del caso mantendría “vínculos sociales con la familia Riquelme”, familia interesada en las tierras de la mencionada finca, sin informar en qué consistirían los vínculos sociales de qué se habla, ni la incidencia de esos vínculos en las investigaciones o en las eventuales condenas.

33. La comunicación de la fuente informa que el 25 de septiembre de 2012 los detenidos iniciaron una huelga de hambre en protesta por la lentitud del proceso de investigación y por las irregularidades de la acción judicial. Tratándose de un hecho tan complejo, con una gran cantidad de personas muertas, no resulta atendible que, a tres meses de los hechos, se alegue ya lentitud del proceso. El derecho humano a ser juzgado sin dilaciones indebidas está ciertamente condicionado a la naturaleza del delito, a su gravedad, a la complejidad de la investigación y a otros factores.

34. La fuente afirma que el menor Barrios Cardoso presento un recurso de hábeas corpus que no habría sido tramitado, pero no brinda mayor información al respecto ni explica las razones por las cuales este recurso no fue tramitado.

35. Tanto el Grupo de Trabajo como su Secretaría han hecho ingentes esfuerzos para obtener de la fuente informaciones más precisas, detalladas y actualizadas sobre los hechos y el desarrollo del proceso judicial, sin haber obtenido los resultados buscados. Sólo durante la sesión en que se adopta esta Opinión, se ha logrado saber que las personas incluidas en la comunicación original se encuentran en la actualidad en las siguientes situaciones, ignorándose las fechas desde las cuales los inculcados fueron liberados o se sustituyó la prisión preventiva por medidas menos gravosas:

a) Lucía Agüero Romero, Luis Olmedo Paredes, Alcides Ramírez Paniagua, Juan Carlos Tillería, Felipe Benítez Balmori, María Fanny Olmedo y Dolores López Peralta, se encuentran bajo arresto domiciliario;

b) El menor de 15 años de edad, Richard Ariel Barrios Cardozo, fue condenado por haberse sometido a procedimiento abreviado en Audiencia Preliminar el 14 de febrero de 2013, pero no se indica ni el delito por el que se le condena, ni la pena, ni el fundamento por el cual un niño de 15 años ha sido condenado;

c) Felipe Nery Urbina Gamarra goza de medidas sustitutivas a la privación de libertad,

d) Néstor Castro y Adalberto Castro se encuentran en prisión preventiva;

e) Respecto a Arnaldo Quintana, la información es contradictoria, pues por una parte se dice que se encuentra en arresto domiciliario, pero luego se agrega que está en la Penitenciaría Coronel Oviedo, en prisión preventiva.

**Decisión**

36. Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17, apartado c) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo considera necesario solicitar informaciones complementarias tanto al Gobierno como a la fuente, manteniendo mientras tanto el caso en examen a la espera de recibir dicha información.

*[Aprobada el 30 de agosto de 2013]*

---